

Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, 11 de Octubre de 1873. *Lie. Enrique Lanla, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. Cesario Martínez, contra su consignacion al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que la solicitud de amparo presentada por el C. Cesario Martínez, se funda en la violacion del artículo quinto de la Constitución federal, por haber sido detenido contra su voluntad al servicio de las armas, en el cuerpo de infantería que ha organizado el C. Pedro Agüero con el caracter de teniente coronel de las fuerzas del Estado.

No siendo bastante el dicho del quejoso, y habiéndose negado el C. comandante Romualdo Dávila, inmediato ejecutor del acto reclamado, á dar el informe con justificacion que se le pidió, hubiera sido necesario abrir el término de pruebas para que se acreditasen los hechos, si el C. teniente coronel Agüero, como superior de aquel gefe, contestando el requerimiento que se le hizo á nombre de los Supremos Poderes de la Union para que ordenase al inferior la suspension de aquel acto, no hubiese demostrado que son ciertos los hechos que motivan la solicitud de amparo, al manifestar en el oficio de fojas 10, que no se consideraba con el deber de obsequiar dicha suspension, por creerla contraria á la Orden teleggráfica del 18 de Octubre de este año, comunicada por el C. Ministro de Guerra, en la que se proviene á la fuerza federal

que no impida al representante de la autoridad se proporcione recursos para la fuerza de la poblacion. El telégrama dice: "Ya ordene al capitán Donaciano Bélix, que no impida el que V. (se dirige al Sr. D. Juan Valdéz Ramos) como representante de la autoridad en ese punto, se proporcione recursos para la fuerza; y le prevenga que tanto él como el teniente coronel Paniat cuando llegue y tome el mando, impidan que esa poblacion sea atacada; y en caso de que lo fuere, unan su fuerza á la de la poblacion para defenderla, manifestando á los que pretendan usar de la fuerza para tomarla, que el Presidente no autoriza las vías de hecho, sino que los deja en libertad para usar de su derecho."

Diversas interpretaciones se han hecho de esta Orden; para unos solo debe entenderse como *fuerza de la poblacion*, la que organice el comercio y los ciudadanos pacíficos para evitar los cateos y ataques á la propiedad; para otros significa una proteccion indirecta, al sostenimiento de las fuerzas que se organizan en favor de una de las partes contendientes, en que por desgracia está dividido el Estado.

Sin necesidad de calificar la exactitud de estas interpretaciones, es evidente que dicha Orden no importa una suspension de las garantías individuales consignadas en la Carta federal, ni una derogacion de los preceptos legales, que prescriben la obediencia á las disposiciones de la Justicia de la Union.

Otra de las causas que manifiesta el expresado C. Teniente Coronel, para negarse á ordenar al inferior la suspension del acto reclamado, es la de no reconocer á V. como Juez de Distrito, por no haber protestado guardar las reformas y adiciones constitucionales últimamente promulgadas. La falta de fundamento de esta causa, está demostrada en el oficio que ese Juzgado le dirigió en contestacion, por una mala deferencia y urbanidad. Allí se le advierte, que por Orden del Ministerio de Justicia, á cau-

sa de no encontrarse el C. Gobernador del Estado, que es la primera autoridad política, en el lugar donde reside el Juzgado, el día que debió verificarse dicha protesta, la hizo V. por escrito ante el mismo Ministerio, comunicándolo á la Suprema Corte; que aun cuando fuese cierto aquel hecho, no significa que V. se negase á prestarla; y aun en este último caso, la declaracion de estar V. impedido para ejercer las atribuciones de Juez de Distrito, depende exclusivamente del poder Ejecutivo de la Federacion y no de la voluntad de los funcionarios locales.

En estos dos casos se funda el expresado gefe militar para desobedecer el requerimiento referido. La responsabilidad que pueda resultarle del menosprecio y resistencia que ha hecho á la Justicia federal, debe examinarse por cuerda separada. En el presente juicio es bastante para proceder, la certidumbre de los hechos en que se funda la solicitud de amparo, que aparece de aquella resistencia á suspender el acto reclamado.

No es necesario examinar hasta donde se extiendan las facultades que las autoridades á cuyas órdenes se hallan aquellos gefes, tengan para cumplir con el deber de conservar la seguridad pública, ni saber si todos los ciudadanos coahuilenses tienen obligacion de prestar el servicio de las armas para establecer el orden legal. Sobre estos puntos ninguna declaracion puede hacerse sin tocar la soberanía de una entidad libre é independiente en su régimen interior. Los procedimientos de este juicio deben limitarse á proteger ó amparar al solicitante, si consta la violacion de alguna de las garantías individuales, que conservan todo su vigor y fuerza, no obstante el lamentable trastorno público que agita al Estado.

En este concepto y supuesto que la resistencia del referido gefe militar á suspender el acto reclamado, comprueba los hechos en que se funda el C. Cesario Martinez para asegurar que se le ha exigido con-

tra su voluntad el servicio personal de las armas, con violacion de las garantías mencionadas; si estas permanecen vigentes y no pueden suspenderse sino por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y mediante la aprobacion del Congreso; y finalmente, si mientras tengan vigor deben ser respetadas y sostenidas por todas las autoridades del país, es indudable que el amparo solicitado debe proceder.

Estas consideraciones impelen al Promotor á pedir á ese Juzgado se sirva declarar; Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Cesario Martinez contra el hecho de haber sido destinado al servicio de las armas en el cuerpo de infantería del Estado. Segundo: Que debe procederse á formar causa á los CC. Remualdo Dávila y Pedro Agüero, al primero por haberse negado á producir los informes que se le pidieron y por no haber obedecido la suspension del acto reclamado; y al segundo por no haber obsequiado el requerimiento que se le dirigió á nombre de los Supremos Poderes de la Federacion, y por haber desconocido la autoridad de ese Juzgado. Saltillo, Noviembre 18 de 1873.—*H. Horeauitas*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Saltillo, Noviembre 28 de 1873.—Damos fé.—*Lic. M. Sanchez*.—*A.*—*Bernardo Laredo*.—*A.*—*Antonio D. Treviño*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Saltillo, Noviembre 27 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Cesario Martinez, el día 11 de Octubre próximo pasado, contra el C. Remualdo Dávila gefe del cuerpo de infantería llamado «El Primer Ligero de Coahuila,» por haber sido cogido de leva y refundido en el contra su voluntad por el referido gefe; el auto en que de conformidad con el artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869,

se pidió informe al expresado Dávila, que no rindió, escusándose no ser él la autoridad ejecutora, ni estar bajo sus inmediatas órdenes el cuerpo de infantería en que se encuentra el quejoso, y sí el Teniente coronel Pedro Agüero, quien mandaba en jefe las fuerzas del Estado que existían en esta ciudad; lo pedido por el ciudadano Gefe de Hacienda en sustitucion del ciudadano Promotor fiscal, sobre la suspension del acto reclamado; el auto de suspension decretado por el juzgado, con entera sugesion á la ley de la materia ya referida, el cual fué notificado al C. Romualdo Dávila, y no acatado por este, no obstante ser público y notorio ser el gefe inmediato del referido cuerpo, llevando su desobediencia al grado de no dar la contestacion conveniente á la nota en que se le trascribió el decreto de suspension mencionado; el requerimiento hecho al ciudadano Teniente coronel Pedro Agüero, como superior inmediato, en nombre de los Supremos Poderes de la Federacion, para que se sirviera ordenar el cumplimiento de la resolucion que este dió, manifestando no poder obsequiar la prevencion del juzgado, tanto por creer lo contrario á lo dispuesto en el telégrama del ciudadano presidente de la República, publicado en esta ciudad, en el que se manda que no se impida al gefe político proporcionarse recursos para el sostenimiento de la plaza, siendo el primero y principal, tener el mayor número de fuerza posible y sin el cual lo demas seria sin objeto, como por no juzgar al personal del juzgado ejerciendo legalmente su encargo, por no haber otorgado la protesta conforme á la ley expedida sobre el particular, la nota oficial que en debida contestacion y por una mera deferencia, le dirigió el juzgado, manifestándole que la resolucion del juzgado, relativa á la suspension del acto reclamado por el quejoso Cesario Martinez, estaba fundada en los artículos quinto y sexto de la ley de 20 de Enero de 1869; y que los fundamentos de su negativa no los creia legales, porque la recomendacion á orden que

contenia el telégrama referido, no podia de ninguna manera suspender la Constitucion de la República, ni las leyes vigentes; y porque ademas, el personal del juzgado tenia ya otorgada su protesta ante el ministerio de justicia por su orden expresa; el auto en que de conformidad con el artículo noveno de la expresada ley de 20 de Enero, se pidió al ciudadano gefe del primer ligero el informe con justificacion respectivo, el cual hasta hoy no ha sido rendido; el en que se mandó correr traslado al Lic. C. Esteban Horcasitas, promotor fiscal propietario de este juzgado, para los efectos del artículo noveno ya citado; el dictámen de este funcionario que no solo apoya y robustece las razones emitidas y comunicadas al ciudadano Teniente coronel Pedro Agüero, en contestacion á la nota en que este desobedeció el requerimiento que le hizo el juzgado, sino que demuestra de una manera clara, la ilegalidad de los fundamentos de su negativa, concluyendo con pedir que la justicia Federal ampare y proteja al C. Cesario Martinez contra el hecho de haber sido destinado al servicio de las armas contra su voluntad, y que se proceda por el juzgado á formar causa á los CC. Romualdo Dávila y Pedro Agüero; al primero por habers negado á producir los informes que se le pidieron, y por no haber obedecido la suspension del acto reclamado; y al segundo por no haber obedecido el requerimiento que se le hizo en nombre de los Supremos Poderes de la Federacion y por haber desconocido al juzgado; el auto en que se mandan dejar en la secretaría los autos, para que las partes tomen sus apuntes y formen sus alegatos respectivos; y por último, el de citacion para sentencia con todas las demas constancias que obran en ellos.

Considerando; que de autos aparece suficientemente probado el hecho reclamado por Cesario Martinez, en virtud del cual fué refundido al primer ligero de Coahuila por el gefe de este cuerpo, contra su voluntad, y despues de haber sido cogido de leva;

que este acto importa, nada menos, que la violacion del artículo quinto de la Constitucion general de la República y quinto de las adiciones ó reformas á la misma, promulgadas el 25 de Setiembre próximo pasado, que este juzgado ha protestado guardar y hacer guardar; que estas disposiciones legales conservan todo su vigor y fuerza, no obstante el lamentable estado de revolucion porque actualmente atraviesa el Estado, y no obstante las razones que sirven de fundamento á la autoridad requerida para no mandar que se acate debidamente la órden de suspension decretada en este juicio, supuesto que las garantías que ellas otorgan, no han sido suspensas en la manera y términos que previene el artículo 29 de la expresada Constitucion, ni mucho menos han sido derogados los artículos que las otorgan; que así mismo es un hecho constante de autos, la desobediencia y desconocimiento á este juzgado, cometidos por los ciudadanos Comandante Romualdo Dávila y Teniente coronel Pedro Agüero.

Con fundamento en las anteriores consideraciones y pedimento fiscal, y en los artículos 59 y 101 de la Constitucion general de la República, y 59 de las adiciones y reformas de la misma, promulgadas el 25 de Setiembre próximo pasado, y 22 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Cesario Martinez, contra el acto del ciudadano Comandante del primer Ligero de Coahuila, en cuyo cuerpo, por su orden, fué refundido contra su voluntad despues de haber sido cogido de leva en la casa del C. Antonio Fuentes. Segundo: Que se forme causa á los ciudadanos Teniente coronel Pedro Agüero, y Comandante del primer Ligero de Coahuila Romualdo Dávila, sacándose al efecto copia de esta sentencia y demas diligencias conducentes para que sirva de cabeza al proceso que deberá formarse. Remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision, con las copias de estilo;

publíquese este fallo y notifíquese. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el ciudadano Juez de Distrito del Estado, actuando con testigos de asistencia.—Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez.*—*A.—Bernardo Laredo.*—*A.—Antonio D. Treviño.*

Es copia que certifico. Saltillo, Noviembre 27 de 1873.—Damos fé.—*Lic. M. Sanchez.*—*A.—Bernardo Laredo.*—*A.—Antonio D. Treviño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 17 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Cesario Martinez ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, contra su consignacion forzada al ejército; y apareciendo del expediente plenamente justificada la violacion en la persona del quejoso, de la garantía que otorga el artículo quinto de la Constitucion Federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Cesario Martinez, contra el hecho de su retension forzosa en el servicio militar.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Diciembre 22 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por los CC. Melquiades Carvajal, Miguel Sesma y otros, contra el C. Receptor de rentas de Tepeapulco que al embargarles parte de sus bienes ha violado en ellos las garantías que les aseguran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución federal.

PLEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Los CC. Miguel Sesma, cesionario del C. Melquiades Carvajal, Miguel López, José María Jurado, Simón y Juan Delgadillo, Nolazco Luna, Francisco Bravo, Juan Zavala, Ignacio Vecino, Pablo Valencia y Zeferino Hernández, fraccionarios de la hacienda de San José el Grande, solicitan de la Justicia federal por medio de su apoderado Lic. Ignacio Durán, se les ampare y proteja contra el C. Receptor de rentas de Tepeapulco, que al embargarles parte de sus bienes, ha violado en ellos las garantías que les aseguran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución general.

Es un hecho probado por el documento que obra á fojas tres de estos autos, que á la solicitud que elevó el C. Lic. Manuel Piña y Cuevas al Gobierno del Estado en 1869, para que este le eximiera del pago del derecho de traslación de dominio por la venta que hizo de unas fracciones de su hacienda de S. José, recayó un acuerdo en 30 de Abril del año citado, de conformidad con la solicitud, siempre que se cumpliera con las prescripciones de la ley federal de 6 de Febrero de 1861. Lo es también por la copia certifi-

cada por el C. Receptor, que la Legislatura resolvió en 3 de Abril último hiciesen los quejosos el pago de la alcabala.

Esto basta para conocer, que las disposiciones posteriores y que obligan á los promoventes al pago, son atentatorias de las garantías de que hacen referencia en su recurso respectivo, pues ni la venta se hizo conforme á la ley federal ya citada, y al Sr. Lic. Manuel Piña y Cuevas se le eximió del pago; de conformidad con el artículo 10 de esta, ley es patente la invasión de los poderes del Estado en la esfera de la autoridad federal, en los términos de la fracción tercera del artículo ciento uno de la citada Constitución general, á la que solo toca como autoridad competente interpretar y derogar sus leyes.

Por lo expuesto y con fundamento del artículo ciento uno, fracción tercera, de la Carta política de la República, al Juzgado pido el Promotor se sirva declarar: que la Justicia federal ampara y protege á los fraccionarios de la hacienda de San José el Grande. Pachuca, Julio 15 de 1873.—*M. Sanchez*.—Una Rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Julio 29 de 1873.—Visto este juicio promovido por el C. Lic. Ignacio Durán en representación de los CC. Miguel Sesma, Miguel López, José M. Jurado, Simón y Juan Delgadillo, Nolazco Luna, Francisco Bravo, Juan Zavala, Ignacio Vecino, Pablo Valencia y Zeferino Hernández, fraccionarios de la hacienda de San José el Grande, pidiendo amparo y protección contra el C. Receptor de Rentas de Tepeapulco, que les cobra derechos de traslación de dominio, por sus respectivas fracciones de la expresada hacienda, alegando que semejante providencia, invade la expresada autoridad federal, y viola las garantías de los artículos 14, 16 y 27 del Código fundamental de la República, porque la ley gene-